

Pachuca, Enero diez y ocho de mil ochocientos setenta y uno.—(Firmado.)—*Rafael Villegas.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Pachuca, Enero veinte de mil ochocientos setenta y uno.

En vista de la comunicacion de la Gofatura política de esta Ciudad, fecha de ayer, de la que resulta que el quejoso C. Márcos Rivas se halla en completa libertad, con fundamento de las razones del artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, y de la 2ª título 16 libro 11 de la N. R., se sobresee en este juicio, por no haber ya materia sobre que verse.

Hágase saber, publíquese este auto por los periódicos y remítanse estos autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision llamándole la atencion sobre los términos irrespetuosos y altamente ofensivos á la dignidad de este Juzgado con que se produce el C. José M. Gambino, contra quien no se ha procedido conforme al auto de fecha 9 del corriente, por no contar hasta hoy con el auxilio que se ha solicitado del Ejecutivo de la Union. Lo proveyó y firmó el C. *Lic. Miguel Mejía*, Juez de Distrito del Estado de Hidalgo. Doy fe.—(Firmados.)—*M. Mejía.*—*Agustin Villa*, secretario.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el C. Márcos Rivas ante el C. Juez de Distrito de Hidalgo, contra el Mayor de la fuerza de seguridad pública de Pachuca, C. José M. Gambino, por haberlo reducido á prision, violando la garantía á que se refiere el artículo 19 de la Constitucion federal;

y teniendo en consideracion, que el quejoso fué puesto en libertad antes de espirar el término proscrito en la Constitucion para dar el auto motivado de prision, lo cual deja ya sin lugar el objeto del recurso de amparo; por lo expuesto, de conformidad con lo que se previene en el artículo 23 de la ley de 20 de Enero de 1869, y en virtud de lo que dispone el artículo 101 de la misma Constitucion, se decreta: que se confirma el auto de sobreseimiento, pronunciado el 20 de Enero próximo pasado, por el Juez de Distrito de Hidalgo.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de este auto para los efectos consiguientes, y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el C. Fernando Zepeda, contra la Legislatura del Estado de Chiapas por su acuerdo de 3 de Octubre del año de mil ochocientos setenta, por importar una violacion de las garantías que otorgan los artículos 14 y 21 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que habiéndose promovido este juicio por el Diputado D.

Fernando Zepeda, con motivo del acuerdo de la Legislatura del Estado, de 3 de Octubre último, corresponde entrar al exámen de los autos. Estos explican, que el decreto número 3 de la misma Legislatura de 24 de Setiembre, en que se apoya el citado acuerdo, fué expedido con posterioridad al acto en que el quejoso entró en el ejercicio de sus funciones de Diputado; por tales razones y sin que pueda entrar á la justa apreciación de los hechos en que se apoya este delicado negocio, por no permitírmelo mi bien notoria insuficiencia, soy de sentir: que es atendible la petición que lo motiva, salvando en todo caso la mejor determinación del Juzgado en este particular.

Tuxtla Gutierrez, Diciembre diez y seis de mil ochocientos setenta.—(Firmado.)—*Abundio Araujo.*

Sentencia del Juez de Distrito.

JUZGADO DE DISTRITO DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Chiapas, Enero siete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el memorial en que el ciudadano Lic. Fernando Zepeda pide amparo contra una resolución que el Congreso del Estado emitió en 3 de Octubre del año próximo anterior, declarando no ser discutible la legalidad ó ilegalidad de la renuncia que aquel hizo del cargo de diputado, por haberle privado de tal investidura el decreto núm. 3 del propio congreso de 24 de Setiembre último. Visto el informe del gobierno constitucional del Estado, como autoridad ejecutora de la providencia reclamada, y los documentos justificativos que acompaña. Visto lo pedido por el ministerio fiscal y cuanto mas de autos aparece y ver convino.

Considerando: que la elección del ciudadano Lic. Fernando Zepeda y la aprobación de su credencial, fueron conformes á las prescripciones de la ley electoral de 22 de Febrero de 1858, y que en esta virtud

funcionó legalmente como miembro de la Legislatura del Estado, y autorizó como secretario de la misma sus acuerdos y demas resoluciones, segun es público y notorio, y nada hay que explique cosa alguna en sentido contrario, quedando desde entonces en el pleno goce de los derechos y prerrogativas anexas á la condicion de diputado.

Considerando: que el decreto de 24 de Setiembre precitado, dispuso: que *cualquiera persona que haya servido á la intervencion extranjera ó al llamado imperio, no podrá ser Gobernador del Estado, Diputado al Congreso del mismo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, secretario del despacho de Gobierno, ni tesorero general, y que esta disposicion es y debe entenderse aplicable desde la fecha del decreto que la establece en adelante como se comprueba con sus mismas palabras; no podrá ser, que hablan de un tiempo futuro.*

Considerando: que si esta debe ser la inteligencia y aplicacion neta de la prevencion del decreto de 24 de Setiembre mencionado, la resolución del Congreso, de 3 de Octubre del año próximo anterior, peca esencialmente contra el tenor y espíritu del artículo 14 de la Constitucion política de la República de 5 de Febrero de 1857, porque retrotrayendo dicha prevencion á hechos legalmente consumados, destruye derechos, en virtud de ellos justamente adquiridos, como son en el presente caso los que corresponden al promovente en su legítimo carácter de Diputado.

Considerando: que es constante en derecho, como principio de justicia universalmente recibido, y conforme, además, con la moral legislativa, que la ley no debe obligar sino desde la fecha de su promulgacion en adelante, y que está garantizado por el artículo 14 de la Constitucion el principio de no retroactividad, que tiene por objeto asegurar los derechos adquiridos legítimamente ó impedir que se destruyan ó varien por leyes posteriores.

Considerando además: que la referida resolución de 3 de Octubre importa intrínse-

camente una providencia de destitucion de empleo, y que la destitucion de empleo es una pena que solo puede ser impuesta por la autoridad judicial, de conformidad con el artículo 21 de la Constitucion; este Juzgado definitivamente resolviendo, y con apoyo de las disposiciones citadas de los artículos 101 y 102 de la Constitucion, y de los artículos 18, 23 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, ha venido en declarar y declarar:

Primero: La Justicia Federal ampara y protege al ciudadano Lic. Fernando Zepeda, contra el acuerdo de la Legislatura del Estado de 3 de Octubre del año de 1870, por importar una violacion de las garantías de que hablan los arts. 14 y 21 de la Constitucion política de la República de 5 de Febrero de 1857, quedando las cosas en el estado que guardaban antes de la emision del acuerdo mencionado.

Segundo: Hágase saber á quienes corresponda, líbrese copia de este fallo para que se publique por medio de los periódicos, y elévense estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision.

El ciudadano Lic. Juan José Ramirez, Juez de Distrito propietario de este Estado, lo decretó y firmó por ante mí el infrascrito escribano. Doy fé.—(Firmados.)—*Juan J. Ramirez.—J. Crisóstomo Lara.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero nueve de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el ciudadano Fernando Zepeda, ante el Juez de Distrito de Chiapas, contra la Legislatura del Estado de ese nombre, que aprobó una proposicion que dice: "No es discutible la legalidad ó ilegalidad de la renuncia hecha por D. Fernando Zepeda,

diputado al Congreso del Estado, porque el decreto número 3 de la Legislatura, de 24 del corriente, le ha quitado el carácter de que estaba investido," cuyo decreto, expedido en 24 de Setiembre último, determinó: que cualquiera persona que haya servido á la intervencion extranjera ó al llamado imperio, no podrá ser Gobernador del Estado, diputado al Congreso del mismo, magistrado del Tribunal Superior de Justicia, secretario del despacho de Gobierno ni Tesorero general, aunque esté rehabilitado para el ejercicio de los derechos de ciudadano mexicano. Considerando: que la representacion del ciudadano Fernando Zepeda como diputado, fué un hecho irrevocable, segun la ley electoral del Estado de 22 de Febrero de 1858, que dispone: que despues del dia en que se debe de resolver por la Legislatura, acerca de los expedientes relativos á las elecciones de diputados, no se admitirá ningun recurso contra la eleccion y se tendrá por legítimo todo lo hecho; pues que fué admitido como diputado de la Legislatura y estuvo desempeñando ese encargo. Que el decreto de Setiembre citado, debe de entenderse aplicable desde su fecha para adelante. Que por lo mismo, la resolucion de la Legislatura de 3 de Octubre, antes mencionada, importa un efecto retroactivo respecto del ciudadano Fernando Zepeda, porque éste, antes de que esa resolucion y el decreto de Setiembre se dictaran, desempeñó el cargo de diputado; cuyo efecto vulnera la garantía á que se refiere el artículo 14 de la Constitucion federal; porque contrayéndose á hechos legalmente consumados, destruye derechos adquiridos justamente en virtud de esos mismos hechos. Considerando: ademas, que la referida resolucion de 3 de Octubre de 1870, tomada por la Legislatura del Estado de Chiapas, importa intrínsecamente una providencia de destitucion de un cargo de eleccion popular, y que esta es una pena que solo puede ser impuesta por autoridad judicial, de conformidad con lo que previene el art. 21 de la Constitucion federal, y

por consiguiente, que impuesta por determinacion de una Legislatura, se viola la garantía á que ese artículo se refiere; por lo expuesto, y en virtud de lo que previene el artículo 101 de la misma Constitucion, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada el 7 de Enero próximo pasado por el Juez de Distrito del Estado de Chiapas, que declara, que la Justicia federal ampara y protege al ciudadano Lic. Fernando Zepeda, contra el acuerdo de la Legislatura del Estado de 3 de Octubre del año de 1870, por importar una violacion de las garantías de que hablan los artículos 14 y 21 de la Constitucion política de la República de 5 de Febrero de 1857, quedando las cosas en el estado que guardaban antes de que se dictara el acuerdo mencionado.

Devuélvanse las actuaciones al Juez de Distrito de Chiapas, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquense por los periódicos, y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.) *S. Lerdo de Tejada.*—*P. Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*L. Guzman.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Febrero diez y siete de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio de amparo promovido por Severiano Partida contra el Director político de la Barca, por infraccion de la garantía á que se refiere el artículo 19 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice:

Severiano Partida se queja de que estando preso desde Setiembre último á disposicion del Director político de la Barca, no se le ha juzgado ni legalizado la prision que sufre con el auto que la motive; y vulnerándosele con tal prision el artículo 19 de la Constitucion federal, pide amparo y proteccion en favor suyo y contra dicha autoridad.

El ciudadano director, en su informe con justificacion que rindió con fecha 29 del mes próximo pasado, confiesa, que no está declarado bien preso el quejoso, y dice: que se procedió á su aprehension por ser hombre de mala conducta, y para juzgarlo con arreglo á la ley de 9 de Abril último.

Los justificantes que produjo el propio ciudadano director, acreditan, que en estos últimos años el quejoso ha seguido una vida honrada y laboriosa; y que si tuvo mala fama porque haya cometido algun delito, esto fué por el año de 1861.

Como el artículo 14 de la Constitucion prohíbe que á ninguna ley se le den efectos retroactivos, á Severiano Partida no se le puede juzgar con arreglo á la ley de 9 de Abril y por hechos cometidos con anterioridad á esa fecha, y por lo tanto está en su derecho para reclamar que se le respete la garantía, cuyo goce le asegura el artículo 19 de la Constitucion.

Por esto, el Promotor pide se resuelva que:

La Justicia de la Union ampara y protege á Severiano Partida contra el acto del ciudadano Director político de la Barca,